

CRIMEN DE ESTADO

EL MUNDO. MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 1994

ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO

El ambiente político, que estaba enrarecido por la intensa pestilencia de la corrupción del Estado de partidos, se ha hecho del todo irrespirable con la putrefacción del crimen de Estado. A partir de ahora, nadie puede ignorar la espeluznante obviedad de que el régimen de poder de «esta» Monarquía parlamentaria, además de tener que cuartear la unidad política de España para sostenerse, tiene que apoyarse, para gobernar, en el latrocinio, y el asesinato, en el miedo y la mentira. Por doloroso que sea, hay que partir de esta obviedad para llegar a captar el sentido criminal que cobran, en la conciencia de la buena gente, las ideas dominantes en los medios de comunicación sobre el GAL. Lo más pernicioso no es la evidente gravedad del crimen de Estado, ni la patente falta de escrúpulos de los gobernantes que lo perpetran o toleran, sino la perversión de esa imprudencia general que, en nombre de la prudencia particular ante una cuestión de Estado, invoca con mentira los peligros sin cuento que se derivarían (¿para quién?) de una investigación judicial sobre los responsables últimos del terrorismo de Estado. La ideología de la impunidad del poder, para no tener que aceptar las consecuencias de un Estado de Derecho, prefiere transformar el crimen de Estado en un Estado del crimen.

Los partidarios del Estado de partidos hacen cómplice de los crímenes de Estado a la sociedad civil, despertando en ella una infundada sospecha sobre la ecuanimidad del juez (venganza, incompatibilidad); una conciencia criminal de la razón de Estado; y una solidaridad «humanitaria» con los presuntos criminales, por patriotismo de partido (Galeote) o de sacrificio contraterrorista (Sancristóbal). El catastrofismo no lo crea el encarcelamiento de altos cargos de la seguridad del Estado. Tal acontecimiento era de esperar desde el procesamiento de Amedo y Domínguez. La opinión estaba preparada para asumirlo desde que el juez señaló con una X a la autoridad del Gobierno que había financiado y patrocinado los crímenes del GAL. No hay, pues, novedad alguna en el terreno de los hechos delictivos que justifique la alarma social o el temor de la opinión pública. Sin embargo, la alarma y el temor nos invaden con mayor intensidad que cuando se cometieron los asesinatos y secuestros. Lo nuevo de estos días, la acción judicial contra presuntos delincuentes de alto copete, debe ser, por el contrario, motivo de seguridad y de confianza para los ciudadanos. Aquí no puede estar la raíz del miedo y de la intranquilidad general.

Lo que produce verdadero pánico, no en el pueblo llano, sino en la clase dirigente, es el general convencimiento de que, si la Ley y la Justicia continúan su curso, y los procesados hablan, terminará en la cárcel, por asesino, el jefe X de la banda terrorista GAL. Y esta posibilidad aterroriza lo mismo al jefe de la oposición que a los banqueros, a los editores de los medios que a los periodistas. Menos mal que en la judicatura todavía no se han apagado los ecos individuales de la dignidad profesional. Y que en la radio se mantienen vivas las dos voces libres que acompañan a esa impresionante minoría de escritores y periodistas que alimentan cada día la llama del valor y de la lucidez en la sociedad civil. Los demás opinantes y comunicadores se dedican a meter miedo en el cuerpo social, con la esperanza de mantener escondida la cara atroz de X, comprando silencios o dictando amnistías, para salvar, dicen ellos, las instituciones. ¿Cuáles? ¿Las de extorsión y asesinato? Frente a esa cínica desconfianza en el funcionamiento normal de sus instituciones, debemos proclamar a los cuatro vientos que no hay régimen de poder que merezca durar un solo día si ha de ser mantenido con el crimen y la mentira sobre el crimen. Como Roma ante Cartago, la verdad y la democracia exigen que sea destruida la oligarquía de partidos, corrompida y sindicada en el crimen de Estado con el oligopolio editorial, para salvar la ciudad de los ciudadanos.